

PERÍODO 118°



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

50^a REUNIÓN – 18^a SESIÓN ORDINARIA (Continuación)
7/8 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor JOSÉ GENOUD,
del señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, don MARIO A. LOSADA,
y del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
doctor JORGE YOMA

Secretarios:

Señor MARIO L. PONTAQUARTO, doctor RICARDO MITRE y señor JUAN C. OYARZÚN

Prosecretarios:

Señor ALEJANDRO L. COLOMBO, doctor MIGUEL A. FERNÁNDEZ ALÍAS,
doctor VÍCTOR R. VANNINI y señor RODOLFO BERNANDINI



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 ALASINO, Augusto
 ALTUNA, Juan C.
 ARNOLD, Eduardo A.
 BAUM, Daniel
 BAUZÁ, Eduardo
 BRANDA, Ricardo A.
 BRAVO, Leopoldo
 CABANA, Fernando V.
 CANTARERO, Emilio Marcelo
 CARBONELL, José F.
 CORACII, Carlos Vladimiro
 COSTANZO, Remo J.
 DE LA ROSA, Carlos L.
 DEL PIERO, Pedro
 GAGLIARDI, Edgardo J.
 GALVÁN, Raúl A.
 GARCÍA ARECHIA, José M.
 GENOUD, José
 GIOJA, José L.
 HUMADA, Julio C.
 LEÓN, Luis A.
 LÓPEZ, Alcides II.
 LOSADA, Mario A.
 LOZA, Juan Carlos
 MAGLIETTI, Alberto R.
 MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique J. M.
 MASSACCESI, Horacio
 MASSAT, Jorge
 MAYA, Héctor M.
 MENEGHINI, Javier R.
 MENEM, Eduardo
 MIKKELSEN-LÖTH, Jorge F.
 MOLINARI ROMERO, Luis A. R.
 MOREAU, Leopoldo R. G.
 ORTEGA, Ramón B.

UDIN, Ernesto René
 PALACIOS, Gerardo L.
 PARDO, Ángel F.
 PRUYAS, Tomás R.
 RAIJER, Beatriz I.
 RODRÍGUEZ, Manuel A.
 RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto José
 ROMERO FERIS, José A.
 ROSTAN, Néstor D.
 SÁEZ, José María
 SAGER, Hugo Abel
 SALA, Osvaldo R.
 SALUM, Humberto E.
 SAN MILLÁN, Julio A.
 SAPAG, Felipe R.
 SERGNESE, Carlos J. A.
 TELL, Alberto Máximo
 UILOA, Roberto Augusto
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VAQUIR, Omar M.
 VARIZAT, Daniel A.
 VERNÁ, Carlos Alberto
 VILLARROEL, Pedro G.
 VILLAVEVERDE, Jorge A.
 YOMA, Jorge R.
 ZALAZAR, Horacio Aníbal

AUSENTES, CON AVISO:

ANGELOZ, Eduardo C.
 CAFIERO, Antonio F.
 DI PIETRO, Arturo R.
 PRETO, Ruggero
 ROMERO, Marcelo J.
 SAPAG, Silvia E.

EN COMISION:

MELGAREJO, Juan I.

SUMARIO

1. Continuación de la consideración en general del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, de Economía, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión por el que se declara en emergencia económico-financiera al Estado nacional (C.D.-12/00). Se aprueba. (Página 5255.)
2. A moción del señor senador Moreau se considera sobre tablas el proyecto de ley en revisión sobre régimen de inmunidades parlamentarias (C.D.-79/00). (Pág. 5326.)
3. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Maglietti. (Pág. 5337.)
4. Continuación de la consideración del tema al que se refiere el punto 2 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 5338.)
5. A moción del señor senador Gioja se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 5341.)
6. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en dos proyectos presentados por los señores senadores Branda y Bauzá, respectivamente, y en varios expedientes Oficiales Varios sobre requisitoria de un juez federal. Se aprueba. (Página 5342.)
7. Apéndice:
 - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 5345.)
 - II. Inserciones. (Pág. 5351.)

El artículo 43 es de forma. Queda sancionado el proyecto de ley.¹ Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.

2

REGIMEN DE INMUNIDADES PARLAMENTARIAS

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. – Señor presidente: en el entendimiento de que ha ingresado en este cuerpo una sanción de la Cámara de Diputados referida al régimen de inmunidades parlamentarias es que solicito su tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente (Genoud). – En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). – Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Colombo). – (*lee*)

Señor presidente del Honorable Senado

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que ésta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º – Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador,

funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando no hubiera sido indagado, presentarse al tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento de domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara.

Art. 2º – La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión.

Art. 3º – Si un legislador hubiera sido detenido en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Nacional, el tribunal pondrá inmediatamente en conocimiento del hecho al cuerpo legislativo correspondiente, quien decidirá por los dos tercios de los votos, en sesión que deberá realizarse dentro de los 10 días, si procede el desafuero. En este caso se actuará conforme al artículo 70 de la Constitución Nacional. Para el caso de denegar la Cámara el desafuero, el juez dispondrá la inmediata libertad del legislador.

Art. 4º – Si fuera denegado el desafuero, la suspensión o remoción solicitadas, el tribunal declarará por auto que no puede proceder a la detención o mantenerla continuando la causa según su estado.

En cualquier caso regirá la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal.

Art. 5º – En el caso del artículo 68 de la Constitución Nacional, se procederá al rechazo *in limine* de cualquier pedido de desafuero.

Art. 6º – Deróganse los artículos 189, 190 y 191 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984).

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor Presidente.

Sr. Presidente (Genoud). – En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. – Señor presidente: en función de lo que dijimos anteriormente, para facilitar la aprobación de este proyecto, en la consideración en general, los miembros de mi bancada van a pedir la inserción de sus discursos. Por supuesto, vamos a aprobar con mucho agrado el contenido de esta ley.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. – El espíritu de nuestra bancada va en el mismo sentido. Es evidente que toda

¹ Ver el Apéndice.

crisis genera una oportunidad. En este sentido la norma que vamos a considerar...

—Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Genoud). — Por favor, silencio. Sigue en uso de la palabra el senador Moreau.

Sr. Moreau. — En este sentido la norma que vamos a considerar significa —a nuestro juicio— una evolución positiva, desde el punto de vista del desarrollo republicano, de la génesis que han tenido los regímenes de inmunidad y transformación a los legisladores de la Nación Argentina —cada vez más— en ciudadanos comunes que tienen las mismas obligaciones y derechos que el resto de nuestros conciudadanos.

Acompañando el criterio de la bancada mayoritaria en este recinto, no vamos a ampliar nuestros fundamentos y solicitamos la votación.

Sr. Presidente (Genoud). — Si no hay otro senador que desee hacer uso de la palabra...

Sr. Varizat. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Varizat. — Señor presidente: voy a tratar de ser breve, porque creo que no hay mucho para decir.

Lamentablemente, creo que el justicialismo ha pagado muy caro esta ley, porque la entrega que se ha hecho a través de la sanción de la ley de emergencia económica para tener esta solución que yo creo que no soluciona nada...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Varizat. — ...comprueba este acuerdo que hemos denunciado ayer con el gobernador de mi provincia y reafirma...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Varizat. — ...creo que agranda el escándalo y la vergüenza que estamos generando en este Senado, señor presidente...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Sala. — Señor presidente: quiero rechazar totalmente las expresiones del señor senador Varizat, como hombre del justicialismo y hablando en nombre de todos los miembros de este blo-

que. No hemos entregado absolutamente nada para el tratamiento del proyecto de ley que estamos considerando ahora.

Por eso, rechazamos por agraviantes, injustas y desubicadas las expresiones del senador Varizat.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: adelanto mi voto por la afirmativa para esta iniciativa.

En homenaje a la brevedad, me remito a los fundamentos que expuse en este mismo cuerpo el 5 de junio de 1996, oportunidad en que hablé por última vez sobre este asunto. Allí están mis fundamentos.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: en primer lugar, voté en contra del proyecto de ley de emergencia económica. Inclusive, creo que en algunos pasajes de mi exposición he criticado muy duramente dicho proyecto. Y lo he planteado así en mi bloque.

Asimismo, voy a votar favorablemente este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados. En 1991, yo era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de dicha cámara, la cual produjo un dictamen, cuya autoría intelectual era del doctor Jorge Vanossi y del malogrado diputado Durañona y Vedia, en el cual se sustenta toda la doctrina que trasunta este proyecto de ley que viene ahora con sanción de la Cámara de Diputados. Es decir que este tema no es de ahora, y no hay ningún acuerdo espurio. Voté en contra de la ley de emergencia económica y voy a votar a favor de este proyecto, porque respeta estrictamente, inclusive, fallos de la Corte Suprema de Justicia de 1873.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Del Piero.

Sr. Del Piero. — Señor presidente: anticipo mi voto favorable al proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados.

Creo que no hay mal que por bien no venga. La difícil situación que estamos viviendo en este Senado ha facilitado que, finalmente, después de tanto tiempo y de tantos proyectos, estemos reglamentando el funcionamiento de los fueros de los señores senadores. Por eso, con toda brevedad agregó mi voto positivo y lo fundamento de esta manera.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: seré muy breve.

Nosotros vamos a ratificar este proyecto, porque a los diecinueve días de haber asumido en el Senado de la Nación, en 1995, presentamos un proyecto similar con el presidente provisional del Senado, basándonos precisamente en la jurisprudencia según la cual tenemos simplemente, como ciudadanos comunes, inmunidad tan sólo de arresto.

Además, yo he tenido un compromiso en la Asamblea Legislativa de la provincia de San Luis en el sentido de que se investigara a todo el Senado o a quienes en realidad llamara el juez. En consecuencia, con esto lo logramos de igual manera. Y quiero decir que, en definitiva, este proyecto defiende el derecho de vindicarse de todo legislador acusado. Por lo tanto, si seguimos con esta traba, no nos vamos a poder vindicar nunca.

En consecuencia, vamos a apoyar la aprobación de este proyecto.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: todavía no se había terminado de votar el proyecto de ley anterior cuando fui al baño. Al volver, ya estaba prácticamente agotada la lista de oradores... *(Risas.)*

Sr. Presidente (Genoud). — Es la dinámica del Senado... *(Risas.)*

Sr. Rodríguez Saá. — Si me dejan hablar, quisiera fijar posición sobre este asunto. Si no me van a dejar hablar, simplemente, díganlo, quítenme el uso de la palabra y ya está.

Sr. Presidente (Genoud). — La Presidencia vela por el cumplimiento del Reglamento.

Sr. Rodríguez Saá. — En el mismo momento en que me enteré que había entrado de Diputados esta sanción, presenté un proyecto alternativo al que solicito se le dé entrada por Mesa de Entradas.

Este proyecto que viene a regular los fueros de los senadores afecta a la Constitución. Está mal hecho, mal redactado y tiene defectos de forma, realmente tremendos, y para nada ayuda a la situación escandalosa que está viviendo el Senado de la Nación.

Hace unos días me advirtieron que si continuaba con esta posición que vengo sosteniendo iba a

ser víctima de operaciones jurídicas, políticas, mediáticas. Creo que eso ya está encaminado y, aun así, voy a seguir hablando y voy a seguir manteniendo mi posición y mis convicciones, aunque sea víctima también de situaciones como ésta. Lo mejor que le puede pasar al Senado de la Nación es respetar la Constitución.

Para este tema la Constitución tiene establecido en su artículo 70, que todos conocemos, que cuando se forme juicio criminal de investigación corresponde que el juez pida el desafuero. En los primeros casos de jurisprudencia que hubo, creo que en 1873, ya estaba establecido que el juez debía continuar la investigación y no tenía ningún inconveniente hasta que se produjera una situación, que es pedir el arresto por que se había declarado la prisión preventiva. Ese es el momento en que el juez debe paralizar la causa, concurrir al Parlamento y pedir el desafuero. Ese es el momento de dictar la prisión preventiva. Antes de hacerlo, el juez puede investigar todo lo que quiera. Pero es necesario que el juez paralice el procedimiento y pida el desafuero, porque necesita controlar y ser director del proceso en dos cuestiones: en la investigación y en el sujeto investigado. Tiene que disponer de los elementos de la investigación y del sujeto investigado. No puede dictar la prisión preventiva, y en este caso pedir el desafuero, y si el Senado o el Parlamento dice que continúe el procedimiento, el juez no puede hacerlo, porque no está disponiendo del sujeto de la investigación.

Para ser breve, hagamos una fotografía de lo que puede suceder con esta ley que, realmente, afecta la dignidad del Senado. No tenemos que mirar tan sólo los fueros sino todo ese estatuto y reglamento que hacen a los derechos y obligaciones no sólo de cada senador sino también del juez.

Entonces, hago la siguiente fotografía de lo que puede suceder con esta ley.

Podría suceder que el juez con esta ley llamara a indagatoria. Dejemos de lado este caso y pongamos uno hipotético, o sea dentro de diez años, con otros senadores, otra historia. Supongamos que el Senado dijera: "No, continúe. No le damos el desafuero al senador". El senador continúa y el juez sigue con la investigación que no puede hacer, pero que acá dice que sí, violando la Constitución. Condena al senador y cuando está condenado —ahí el juez tiene que pedir nuevamente el desafuero y se va a volver

a pronunciar la Cámara— resulta que el senador —con todos sus atributos y al que hay que respetar por el principio de inocencia y porque, además, mientras no se le quiten los fueros sigue siendo senador— está en comisión, en un viaje en Francia, en cualquier lado. Se entera de la condena y, en vez de volverse en el avión para la Argentina, se queda en Francia. Entonces va a dar la imagen, y esto puede suceder en muchos casos, que un senador condenado ha utilizado al Senado de la Nación para evadir el arresto. Podría darse el caso...

Sr. Branda. — Se pide la extradición.

Sr. Rodríguez Saá. — Sí, después viene la extradición y todo. Pero de alguna manera está utilizando el marco del Parlamento para producir un hecho así.

Esto sería realmente algo mucho más escandaloso. Incluso, alguien podría llegar a decir que de alguna manera estamos utilizando el Senado —no quiero usar una palabra fuerte— como una manera de evadir la acción de la Justicia, como un lugar donde se puede evadir la acción de la Justicia. Por eso propongo la consideración y aprobación de un proyecto que realmente respeta la Constitución y, sobre todo, que garantiza el derecho de defensa en juicio, cosa que no ocurre con esta iniciativa.

El proyecto que propongo es muy breve. Sólo modifica un artículo del Código de Procedimientos. El juez puede investigar sin ningún problema. Recién debe pedir el desafuero cuando dictara la prisión preventiva de un legislador y es obligación de la Cámara pronunciarse. Esto garantiza la posibilidad de la investigación así como el derecho a defensa en juicio ya que a la indagatoria puede concurrir el legislador con su abogado.

De hecho, crea la siguiente situación. Después de la indagatoria el juez tiene dos opciones: sobreseer la causa —dar por terminada la causa o absolver al procesado— o dictar la prisión preventiva. Entonces, cuando existe el estado de sospecha, el senador, diputado o quien tenga los fueros, cuenta con la posibilidad de ir a la Justicia para levantar cualquier estado de sospecha y probar su inocencia. Esto es muy importante.

A la luz de los expedientes que están tramitándose en esta Cámara —no voy a hablar de los expedientes—, considero que este proyecto de ley no es correcto.

En la Constitución nosotros tenemos la figura del debido proceso o del juez natural, etcéte-

ra. Así, cualquier ciudadano tiene una especie de fotografía o de retrato sobre qué puede pasar o quién lo va a juzgar en caso de que él cometa una irregularidad o suceda algo.

Hasta aquí el retrato en el Senado de la Nación era sin esta ley. Nosotros estamos incorporando un nuevo marco legal que altera la situación jurídica vigente. Entonces, la gente tiene derecho a pensar que estamos poniendo un marco legal que puede resultar beneficioso para el caso en cuestión.

Sr. Branda. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Genoud). — Solicita una interrupción el señor senador Branda.

Sr. Rodríguez Saá. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Genoud). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. — Señor senador: le pregunto...

Sr. Presidente (Genoud). — No; diríjase a la Presidencia.

Sr. Branda. — Perdón. Señor presidente: yo creo que la indagatoria es el acto procesal de mayor defensa que tiene el indagado. Aquí ningún señor senador se resistió a la indagatoria; al contrario: pusimos todo a disposición del juez para que indague. Yo creo que en el acto procesal posterior, donde el juez debe decidir justamente si sigue con el procedimiento adelante, es donde correspondería el pedido de desafuero.

En lo personal, yo me he presentado ante el señor juez para que me indague y, como respuesta me dijo que no me iba a tomar indagatoria porque no estaba desaforado. Este es el problema. Entonces, debemos entender que desde el punto de vista procedimental estamos en una situación difícil.

Quizá esta propuesta pueda arreglar la situación. No sé si el proyecto que está promoviendo el señor senador Rodríguez Saá es mejor o no; quizá lo sea. No voy a discutir eso. Lo cierto es que estamos en una actitud netamente política y ante un problema institucional que todos los señores senadores queremos solucionar. Esto es lo que se debe comprender y, dentro de ese marco, realizar el análisis jurídico.

Sr. Presidente (Genoud). — Continúa en uso de la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Alasino. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Rodríguez Saá. — Le contesto al señor senador Branda y después acepto la otra interrupción. No tengo ningún inconveniente.

Sr. Alasino. — Señor senador ...

Sr. Rodríguez Saá. — No; permítame. Porque no soy tan inteligente como para contestar tantas preguntas juntas.

Considero lo siguiente: el señor senador Branda tiene absolutamente razón y, por eso, afirmo que mi proyecto es mucho más garantista que el que estamos considerando.

La iniciativa que promuevo respeta la Constitución. Entonces, cuando el juez dicta la prisión preventiva, ya medió la indagatoria y tuvo la alternativa de sobreseer la causa. Esta posibilidad no está contemplada en el proyecto que estamos considerando. Reitero: con mi propuesta, el juez tiene la alternativa de que el imputado se vaya libre de culpa y cargo; y es una alternativa que el otro proyecto no tiene. Además, el sospechado puede concurrir con su abogado defensor.

Cuando el juez dicta la prisión preventiva —tiene razón el señor senador Branda— ya se garantizó todo el derecho a defensa. Entonces ahí sí: o se paraliza el procedimiento o se desafuera al imputado y se procede al arresto.

Esto es mucho más sano. Es exactamente lo que pide la Constitución Nacional en el artículo 70. De la otra manera, lo estamos violando.

Fíjense lo que dice este proyecto con relación al tema de la declaración indagatoria; es una barrabasada. Creo que ha venido muy a las apuradas y se ve que no se ha tenido en cuenta la redacción jurídica. Dice que el llamado a indagatoria no se considera una medida restrictiva de la libertad. Esto es una perogrullada: podemos decir, por ejemplo, “al llamado a indagatoria se puede concurrir en auto; al llamado a indagatoria se puede concurrir cinco minutos más tarde, o se puede concurrir peinado”. Es exactamente una verdad de Perogrullo; es absolutamente obvio. No sé qué se quiere decir con esta frase; no se entiende. Porque el llamado a indagatoria, efectivamente, no es una medida restrictiva de la libertad.

Sr. Villarroel. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Alasino. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Genoud). — El senador Villarroel le pide una interrupción que a lo mejor le esclarece su duda. ¿Se la concede?

Sr. Rodríguez Saá. — Cómo no; cómo se la voy a negar.

Sr. Villarroel. — Son diez segundos nada más; le agradezco, señor senador.

La frase tiene sentido porque justamente los autores originales de la norma vigente del Código Procesal —que han sido los cordobeses, en 1940— sostenían que una citación a indagatoria a un legislador supone el apercibimiento de que si no concurre será compelido por la fuerza pública a hacerlo; y esto significa una restricción de la libertad. A eso obedece la norma.

No he oído el discurso del miembro informante en Diputados, pero me imagino que obedece a esto.

Sr. Alasino. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Rodríguez Saá. — Le contesto al senador Villarroel y no tengo ningún problema en concedérsela..

Es cierto lo que dice el senador. Pero ¿cuánto es la restricción de la libertad? Cuando no concurre y se ordena el arresto. Entonces, el arresto es la restricción de la libertad, no la declaración indagatoria.

La declaración indagatoria es un acto en el que uno se sienta y el juez le pregunta cosas. Esto es todo. La declaración indagatoria no es restrictiva de la libertad.. Si uno no concurre, el arresto posterior sí es restrictivo de libertad. Esta es una verdad de Perogrullo.

Fíjense otra; dice acá: “en el caso de dictarse alguna medida que vulnere la inmunidad de arresto...” Esta es una frase totalmente sin sentido. Se puede decir, por ejemplo, en el caso de dictarse el arresto; es suficiente.

Hay una serie de agregados que tiene este proyecto que tratan de tapar o de hacerlo farragoso para que no se entienda. Esta iniciativa tiene un tremendo defecto: admite que un senador condenado por la justicia permanezca en el Senado de la Nación. Esto es muy grave, muy serio.

El otro proyecto propone un exacto equilibrio entre los poderes, de manera que en el momento en que se dicta la indagatoria es obligación de esta Cámara contestar.

Sr. San Millán. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Alasino. — ¡Yo la había pedido antes!

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el senador Alasino.

Sr. Alasino. — Señor presidente: comparto que este último proyecto es mucho más prolijo y claro. Lo que pasa es que tal vez políticamente no tenemos tiempo de aprobarlo y que vuelva

a Diputados. Demoraría la necesidad que tenemos de dar una respuesta inmediata respecto del tema de los fueros.

Pero más allá de esa cuestión valorativa, creo que hay que hacer el siguiente razonamiento. No todos los autos de prisión preventiva conllevan necesariamente la prisión efectiva. No todos los autos de prisión preventiva imponen arresto. Si se tratara de algún delito en el que la prisión preventiva no supusiera la privación de la libertad de locomoción, estaríamos en la misma situación de este proyecto. El senador podría seguirse moviendo; podría irse a Europa y, enterado allá de la sentencia, podría volver para acá.

No conozco sentencia dictada en ausencia. Entonces, la hipótesis académica del senador Rodríguez Saá en la realidad es muy difícil. Porque en el supuesto de que el senador reciba la sentencia afuera del país, no conozco que en ausencia realmente esto pueda ocurrir.

De todas maneras, en estas hipótesis finales, que desvían casi en el absurdo, en una posibilidad muy remota, es cierto que se presentan tal vez más dudas sobre el proyecto que vamos a votar. Es cierto también que es más prolijo este proyecto, que lo conocemos recién ahora. Pero me parece que más allá de estas situaciones, la urgencia que tenemos es dar una respuesta inmediata.

Precisaría que el senador Rodríguez Saá me haga algunas reflexiones al respecto.

Sr. Presidente (Genoud). — Continúa en uso de la palabra el senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — La prisión preventiva siempre conlleva el arresto. Lo que pasa es que contra la prisión preventiva está la apelación y la excarcelación. El remedio de la prisión preventiva tiene un contrarremedio, que es la excarcelación. Si se dicta la prisión preventiva y en el acto se excarcela, perfecto, está solucionada la cuestión. La prisión preventiva siempre conlleva el arresto.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el senador San Millán.

Sr. San Millán. — Señor presidente: el senador por San Luis hizo referencia a la redacción del proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados y señaló que los defectos de redacción se deben al apresuramiento seguramente —dijo— con que fue tratado y analizado en la Cámara de Diputados.

Quiero informar que este proyecto de ley fue dictaminado por las comisiones de Asuntos

Constitucionales y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2000. Este proyecto de reglamentación de las inmunidades tenía como antecedentes un proyecto de la diputada Godoy, uno del diputado González Gaviola, otro de los diputados Vitar y Flores y un proyecto de los diputados Raimundi y Garré. Este dictamen fue aprobado por unanimidad el 31 de marzo de 2000 y está encabezado por la firma de la diputada Elisa Carrió. El último párrafo del informe de este dictamen dice: "Este dictamen se basa en proyectos que han sido dictaminados en la Comisión de Asuntos Constitucionales en los expedientes presentados por los señores diputados Álvarez —refiriéndose al actual vicepresidente de la República—, Fernández Meijide, Fernández de Kirchner y Acevedo, Maqueda y Soria, Estrada, Viqueira y otros,... que han sido plasmados en el Orden del Día 2.597/99..." También tengo el Orden del Día, que tiene fecha 21 de septiembre de 1999.

O sea, no es un proyecto que se ha tratado, discutido y analizado en estos días sino que tiene antecedentes del año pasado, incluso algunos proyectos del año 98, siendo todos coincidentes. Hay un solo dictamen unánime, y así ha sido aprobado por la Cámara de Diputados en el día de la fecha.

No tiene ninguna relación ni cercanía con el tema del pedido de desafuero, que también vamos a tratar seguramente en el día de la fecha en este Senado.

Sr. Presidente (Genoud). — Sigue en uso de la palabra el senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Voy a terminar.

El senador San Millán lo único que ha hecho es darme la razón. Esto es un rejunto de una serie de proyectos, que ha terminado plasmándose en un proyecto único, que es el que estamos tratando.

Para terminar digo que considero que es inoportuno que cambiemos el escenario jurídico que parece destinado al caso escandaloso que está viviendo el Senado, que me duele como a todos.

Pido únicamente que se lea mi proyecto, que es el que voy a votar en su oportunidad.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el senador Maglietti.

—Murmillos en el recinto.

Sr. Maglietti. —Déjenme hablar. Por otra parte, estoy a cargo de la presidencia del bloque. (*Murmullos en las bancas.*)

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Maglietti, de Formosa.

Sr. Maglietti. — Yo creo que hay que respetar la jerarquía, señor presidente. (*Murmullos en las bancas y risas.*)

Sr. Presidente (Genoud). — Señores senadores: les pido que respeten al orador que se encuentra en uso de la palabra.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: aclaro que no hago uso de la palabra simplemente por hablar. Considero que es necesario hacer algunas afirmaciones porque no puede quedar la sensación de que este proyecto no ayuda para nada, como dijo el senador Rodríguez Saá, al efecto escandaloso que hoy sufre la Cámara de Senadores.

Rechazo totalmente esas expresiones porque acá, en la Cámara, este proyecto soluciona todos los problemas. Con este proyecto los senadores nos privamos de todos los privilegios y nos colocamos en igualdad de condiciones con los ciudadanos del país, es decir que nos ponemos en la situación a la que se refiere la Constitución cuando dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

A partir de este proyecto, los senadores vamos a ser y vamos a estar en igualdad de condiciones ante la ley. Así se van a terminar los privilegios, que es lo que el pueblo realmente está esperando.

Cuando sancionemos este proyecto, cualquier legislador, funcionario con inmunidad o juez, va a poder ser procesado hasta la sentencia. Y la única inmunidad que establece este proyecto, señor presidente, es la de arresto. De manera tal que, con esta iniciativa, cualquier juez de la República tiene la garantía absoluta de que cualquier legislador, sea senador o diputado, podrá ser procesado hasta sus últimas consecuencias, y únicamente podrá pedir el desafuero cuando al senador o diputado le sea dictado el arresto, es decir que para arrestarlo tiene que pedirse el desafuero. No es lo que ocurre actualmente, señor presidente, cuando los senadores muchas veces nos encontramos en una situación terrible porque, quizá, no somos responsables de un acto de soborno, ni de un delito y un juez arbitrario, violando la ley, pide el desafuero de senadores sin existir pruebas al respecto. Y esto ¿por qué? Porque en este caso, como en el del

juez interviniente en el caso del Senado, está haciendo “vedettismo” y pidiendo el procesamiento sin haber enviado las pruebas correspondientes. Y, en muchos casos, sin que exista ninguna prueba.

Entonces, señor presidente, a partir de esta ley se van a terminar esos abusos. Y vamos a terminar con un hecho mucho más grave todavía: que haya senadores que aparecen manchados ante la opinión pública porque se les ha pedido el desafuero. No hay derecho de manchar la honra de ningún senador si no hay una prueba contundente de que es un delincuente. Porque hoy, para la opinión pública, la conducta de muchos de nuestros senadores, por el solo hecho de habérseles pedido el desafuero, está manchada. Y resulta difícil defenderse ante la opinión pública.

Señor presidente: con este proyecto, vamos a solucionar estos problemas. ¿Por qué? Porque vamos a poder ser procesados hasta la sentencia y el juez únicamente podrá pedir el desafuero para proceder al arresto. Vamos a dar un ejemplo al país. A partir de la sanción de este proyecto, todos los senadores vamos a ser iguales ante la ley. Cuando un senador sea condenado y deba ser arrestado, entonces corresponderá el desafuero. Y si el senador está en el exterior, habrá que desafuero y solicitar a Interpol el arresto para que lo traigan al país.

De modo que los fundamentos expresados por el señor senador Rodríguez Saá no se adecuan a la realidad. Por el contrario, esta ley creo que va a ser aplaudida por la ciudadanía. Tiene que ser aplaudida, señor presidente, porque...

Sr. Presidente (Genoud). — Señor senador, le solicita una interrupción el señor senador Galván.

Sr. Maglietti. — Sí, cómo no, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Galván.

Sr. Galván. — Señor presidente: en realidad, pensaba hablar al finalizar el discurso del colega por Formosa. Pero lo mío es muy breve.

Se ha echado sobre los senadores que estamos requeridos por la justicia un manto de sospecha en cuanto a la sanción de esta ley. Aprovecho para manifestarle a la Cámara que me voy a retirar. No voy a votar este proyecto de ley para que nadie piense que estoy sancionando normas que pudieran beneficiarme en el proceso.

Además, digo, señor presidente, que estoy en condiciones de ir completamente desahogado ante cualquier magistrado de la República. Estoy escuchando voces que no solamente me colocan en desventaja ante la Justicia sino que rozan mi honor personal.

Y digo, antes de retirarme, que aquel que me está colocando en desventaja frente al magistrado asumirá su responsabilidad y aquel que en lo sucesivo, cualquier senador de esta Cámara, exprese una sola palabra que roce mi honor personal, empeño mi honor de que tendrá que dar explicaciones en otro terreno.

—Se retira del recinto el señor senador Galván.

Sr. Presidente (Genoud). — Continúa en uso de la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: las palabras del señor senador Galván demuestran...

Sr. Presidente (Genoud). — El señor senador Rodríguez Saá solicita una interrupción, seguramente para aludir a lo dicho recién por el señor senador Galván.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: estoy en el uso de la palabra. Por favor, respéteme.

Sr. Presidente (Genoud). — Continúa en uso de la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: las palabras del señor senador Galván vienen a ratificar lo que acabo de decir.

No hay derecho de que un juez tildado de corrupto por una serie de pedidos de juicio político haya pedido el desafuero de un senador como el colega Galván y no haya aportado ninguna prueba, porque la conducta del senador Galván es absolutamente cristalina. Además, todos sabemos y estamos de acuerdo en que el pedido de desafuero se fundó únicamente en el hecho de ser presidente de la bancada radical.

Esa es una demostración cabal de la arbitrariedad del juez Liporaci.

O sea, señor presidente, que hoy vemos que los legisladores, sin la sanción de este proyecto, estamos expuestos a cualquier pedido de desafuero. Y lo más grave del caso es que muchas veces se nos pide el desafuero sin ninguna prueba. Pero la prensa se hace eco de ese pedido y nos coloca en una situación donde debemos salir a defender nuestra dignidad, porque la prensa ya ha hecho una inmensa propaganda de este pedido de desafuero.

Me solidarizo en todo sentido con las palabras del señor senador Galván. Y lo hago porque este proyecto evitará que lleguemos a situaciones extremas como la actual. Va a evitar el abuso arbitrario de un juez como el que está llevando adelante esta causa que, realmente, no es imparcial. Se trata de un juez que está tratando de salvar su situación y de evitar su enjuiciamiento político.

Señor presidente: se ha hecho una crítica a este proyecto, pero lo aplaudo de todo corazón. Creo, y estoy convencido, de que la ciudadanía argentina va a aplaudir este proyecto porque, a partir de él, los ciudadanos argentinos van a mirar a los legisladores como iguales y no como privilegiados que pueden realizar cualquier cosa o cometer cualquier delito y que cuentan con la inmunidad y privilegios como para que no los alcance la Justicia.

A partir de hoy, creo que en la Argentina comenzamos una nueva etapa. Los legisladores comenzamos a dar el ejemplo de que en esta Argentina terminaron los privilegios. Pero tenemos que dar otros pasos. Nuestro próximo paso deberá ser crear un tribunal de enjuiciamiento para que todos los pedidos de juicio político contra los jueces se tramiten en forma rápida, y así podremos terminar en este país de una vez por todas con todos los jueces corruptos, que sé que no son todos, pero sí hay muchos.

Una vez que terminemos con los jueces corruptos, podremos designar jueces honestos para comenzar en el país una verdadera revolución contra la corrupción.

Reitero: para iniciar una revolución contra la corrupción debemos destituir a los jueces deshonestos, a los que apañan la corrupción y designar a jueces honestos, dispuestos a sancionar y condenar a todos los corruptos que hoy están sueltos por el accionar de estos jueces que no han sabido cumplir con la ley sino que, realmente, se han apartado de ella y, por tanto, son los responsables de la gran corrupción que existe en algunos estamentos del Estado.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). — Señor senador Rodríguez Saá: ¿pide la palabra para una interrupción?

Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá, en virtud de una interrupción que concede el señor senador Carbonell.

Sr. Rodríguez Saá. — Me temo que el señor senador Galván pueda haber interpretado mal algunas de mis expresiones. Si en algo he herido su susceptibilidad, me retracto públicamente. Sé la situación que estamos viviendo y de ninguna manera he dicho algo que lo pueda molestar. Al contrario; he expresado ayer —y lo reitero hoy— que es necesario hacer pie en el principio de inocencia y en la dignidad de quienes estamos aquí sentados.

Simplemente he propuesto un proyecto alternativo que sé que sólo contará con un voto; nada. Pienso que tengo el derecho de expresarme y que contribuyo con un proyecto que entiendo que se ajusta más a la Constitución Nacional que la iniciativa que estamos tratando.

He dicho —y lo reitero— que es inoportuno tratarlo en este escenario, cambiando la legislación. Pero esto no tiene nada que ver ni ha ofendido a nadie. No creo que pueda ofender con esto que ratifico en este momento.

En consecuencia, si se ha referido el senador Galván a algo que yo he dicho, tenga por presentadas mis excusas con estas palabras, y solicito que se haga una gestión por Presidencia a fin de lograr que el senador Galván vuelva al recinto y se siente en su banca porque nos sentimos honrados de contarlos entre nosotros.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. — Señor presidente: no coincido con el señor senador Maglietti en el sentido de que este proyecto...

Sr. Meneghini. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Genoud). — Le solicita una interrupción el señor senador Meneghini.

Sr. Carbonell. — La concedo, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Meneghini.

Sr. Meneghini. — Señor presidente: voy a solicitar autorización al cuerpo para retirarme y no participar de este debate.

Comparto por supuesto el espíritu de este proyecto. En 1993 hemos presentado proyectos similares en la Cámara de Diputados, y esto le consta al senador Yoma.

Solicito entonces, dado que estoy afectado por estos hechos, que el cuerpo me autorice para no participar.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Genoud). — De acuerdo con las manifestaciones de los señores senadores esta Presidencia entiende que lo más conveniente es continuar con la sesión, procurando cierta brevedad en las exposiciones de los señores senadores.

Continúa en uso de la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. — Voy a ser muy breve. No comparto las aseveraciones del señor senador Maglietti. No creo que este proyecto modifique la situación de escándalo que vive nuestro cuerpo.

La Constitución y su correcta interpretación proveen las necesarias soluciones para atender los pedidos de desafuero que ha hecho el juez Liporaci. Tampoco comparto la calificación que el señor senador Maglietti ha hecho del juez, de la Justicia en general y de muchos jueces. El principio de inocencia que reclamamos para los señores senadores que integran esta Cámara debe ser necesaria y rigurosamente aplicado a la Justicia. Hasta que no haya un juicio político que descalifique a un magistrado del Poder Judicial nadie puede tener la ligereza de atribuirle tamaños adjetivos, como reiteradamente lo ha hecho el senador Maglietti.

Coincido con el senador Rodríguez Saá en el sentido de la inoportunidad del tratamiento de este proyecto sancionado por la Cámara de Diputados.

Como no creo que este proyecto altere de un modo sustantivo la situación que se plantea en este cuerpo para resolver los pedidos de desafuero, creo que podría ser tratado a posteriori. De todos modos, si este cuerpo le da hoy sanción definitiva, igualmente no quedará convertido en ley porque será necesaria la promulgación oportuna del Poder Ejecutivo para que alguien pueda invocar el uso de este texto en función de la necesaria respuesta que este Senado le debe dar a los pedidos de desafuero hechos por el juez Liporaci.

El Senado puede contestar ese pedido; tiene los elementos suficientes que son los que otorgan los artículos 69 y 70 de la Constitución Nacional y la correcta, sana y unánime interpreta-

ción jurisdiccional y doctrinaria de este instituto del desafuero.

Si bien no es mi intención fulminar este proyecto del modo en que lo ha hecho el senador Rodríguez Saá, creo que esta sanción de la Cámara de Diputados tiene puras palabras, más que palabras puras; tiene demasiado texto para decir lo que se puede señalar con muchas menos palabras. Entonces, estos excesos verbales llevan a algunos derrapes, a los que apuntó el señor senador Rodríguez Saá; aunque no estoy de acuerdo con lo manifestado en su parte final cuando dijo que un senador condenado podría seguir siendo miembro de este cuerpo.

En este sentido, entiendo que la condena, más que la cautela de la prisión preventiva, es el límite a toda inmunidad de un legislador. La condena es el sentido final del límite a la inmunidad de arresto, que consagra el artículo 69 de la Constitución Nacional.

Nosotros hemos hablado demasiado de cautelas de la prisión preventiva, pero es en realidad el arresto que deviene de una condena, la pena que deviene de una condena, la que limita toda inmunidad a un legislador.

Esto podríamos hablarlo, pero desde ya adelante que acompañaré la decisión de mi bloque; sólo quería puntualizar las cosas que acabo de señalar.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. — Señor presidente: quiero señalar que cuando se inició este debate, los que estábamos aquí —y no yendo por los canales de televisión— dijimos claramente que íbamos a intentar ser breves.

Lamento que el señor senador Maglietti haya llegado tarde —por haber estado haciendo ese recorrido— y no haya recogido que las primeras expresiones que nosotros señalamos fueron precisamente las de que este proyecto evolucionaba dentro del sistema republicano al poner en un mayor pie de igualdad a quienes hasta este momento gozábamos de determinadas inmunidades respecto del ciudadano común.

Por otra parte, es de mala fe señalar que esta es la primera vez que el Senado, o el Parlamento argentino, discute esta cuestión. En efecto, hace un tiempo atrás, un senador de la Nación, que fue sometido a proceso en la provincia de Córdoba, motivó también una discusión de esta naturaleza.

Y tampoco es la primera vez que quienes representamos a la Unión Cívica Radical sostenemos este punto de vista. Se podrá estar de acuerdo o no, y tener o no las objeciones que con algún fundamento jurídico ha hecho el señor senador Rodríguez Saá, pero no se puede negar que nosotros no inventamos ni promovimos un proyecto de esta naturaleza a la luz de lo que está ocurriendo hoy en esta coyuntura del Senado de la Nación.

Esta posición la venimos sosteniendo históricamente cuando en otros momentos, también difíciles para el país, se debatieron desafueros en el Parlamento argentino, por caso el de Ricardo Balbín, en la década del 50, como para traer algún antecedente que haga que la gente no crea que hoy estamos discutiendo esto por estas circunstancias por las que estamos atravesando.

De todas maneras, sí es cierto que la crisis vuelve a poner sobre el tapete este tema. Esto es real; sería hipócrita negarlo. Pero es mucho más hipócrita sostener que estamos discutiendo esto como algo hecho a medida de las circunstancias que hoy se están viviendo. Acá se señaló bien: hay proyectos vinculados al tema que vienen de antaño; además de debates que provienen de décadas pasadas.

No obstante, sí es probable que nunca se haya vivido una circunstancia de tanta gravedad institucional o extensión como la que hoy está ocurriendo en el Senado. Esto sí es cierto. Por eso decimos que una crisis es una oportunidad para no hacer lo que llevamos a cabo en el pasado, ya sea porque la gravedad no se extendía con la misma magnitud, porque se trataba del caso individual de un legislador o porque no había una sospecha de carácter generalizado sobre un cuerpo.

Pero no cabe ninguna duda de que este debate está instalado hace años en la sociedad, en el Parlamento argentino y en sucesivos proyectos que, a lo largo de distintos momentos y etapas del Congreso, se pusieron en consideración. Creo que afirmar lo contrario es tratar de instalar el golpe de efecto mediático de que esto se hizo a medida de lo que está pasando, para dejar la frascecita flotando y fijar una posición. Y no es así.

Lo que sí es cierto es que esto impulsó, o disparó definitivamente, una decisión que era hora que se tomara, porque tiene que ver con la evolución del proceso republicano. Estas inmu-

nidades o fueros fueron establecidos hace muchísimo tiempo, cuando los parlamentos nacían cohabitando con las monarquías absolutas. Se hicieron precisamente para garantizar...

No voy a dar interrupciones, señor presidente.

Se hicieron para garantizar —decía— que los representantes del pueblo no fueran avasallados en esa cohabitación por los monarcas absolutos.

Después siguió evolucionando en formas republicanas imperfectas en las que, efectivamente, bajo la apariencia de la legitimidad popular, a veces las dictaduras utilizaban subterfugios para impedir el pleno ejercicio de la labor parlamentaria.

Pero a la luz de lo que sucede en los últimos tiempos con las democracias que se van perfeccionando, en las que confluye el ejercicio de los derechos parlamentarios con el ejercicio pleno de la libertad de prensa, con una mayor participación y vigilancia de la sociedad y con lo que se ha dado en llamar las democracias representativas y participativas, esas inmunidades debían ir decayendo porque, en vez de parecerse a la necesidad de garantía para representar al pueblo, empezaban a parecerse ya no a inmunidad sino a impunidad.

En efecto, hace muchísimos años que tanto el radicalismo como otros sectores vienen diciendo que un legislador puede ser sometido a proceso sin necesidad de ser desaforado. Es decir, puede ser llamado a declarar y ser sometido a todas las etapas de un procedimiento penal sin que medie ninguna decisión especial del cuerpo. Y esto no lo decimos ahora en esta coyuntura de la crisis que se vive en el Senado, sino que lo hemos sostenido siempre, durante muchísimo tiempo, y es justamente lo que está reflejado hoy en este proyecto, con sus perfecciones o imperfecciones desde el punto de vista de la técnica legislativa. No es algo que inventamos para esta coyuntura.

Por supuesto que no compartimos para nada que esta discusión sea transformada por un colega de nuestra bancada en un cuestionamiento específico a un procedimiento judicial. La Argentina tiene el Parlamento que tiene, la Justicia que tiene y el Ejecutivo que tiene y nosotros nos sometemos a esa Justicia en cualquier condición.

No era el motivo de este debate el problema del procedimiento que está llevando adelante el juez Liporaci ni ningún otro juez. Eso es bastardear la discusión. Eso implica crear la impre-

sión de que nosotros estamos buscando impunidad y nosotros no buscamos impunidad para ningún senador de ninguna bancada, ni de la nuestra ni de las otras.

Dijimos en las comisiones que si había que votar los desafueros, los íbamos a votar, independientemente de la opinión subjetiva que nos mereciera cualquier juzgado de la República Argentina, porque si no nos gusta esa instancia, hay otras.

Es cierto que nosotros adherimos al concepto de que el principio de inocencia vale para todos, para cualquier ciudadano, para cualquier periodista que publique lo que sea, para cualquier legislador, para cualquier juez, hasta que no se demuestre lo contrario. Acá no se pueden confundir las cosas.

Yo estoy seguro de que la mayoría de mi bancada no comparte esa apreciación que se hizo, en absoluto, porque nosotros no quisimos traer aquí esa discusión.

Nosotros estamos discutiendo ahora un proyecto que vino de la Cámara de Diputados, que venimos propiciando hace casi cuarenta años, porque lo sostuvimos el día del desafuero de Ricardo Balbín y también hace poco tiempo, cuando se discutió el desafuero del senador Angeloz, y que reiteramos ahora, no a la luz de lo que está ocurriendo.

Efectivamente creemos que sería gravísimo que un parlamentario, sea senador o diputado, eventualmente condenado, permanezca dentro del cuerpo. Pero también es muchísimo más grave que alguien que está sospechado de un delito no tenga la posibilidad de defenderse a sí mismo o que, eventualmente, se lo mantenga con la inmunidad del fuero, adentro de ese mismo cuerpo.

Nosotros queremos que los parlamentarios —no sólo los senadores—, a partir de la sanción de esta ley, en ese sentido, estén en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano sometido a proceso y que cuando llegue el momento de una decisión vinculada al arresto, allí sí, entonces, se deba pedir el desafuero. ¿Por qué? Por una razón elemental, que es la razón por la cual hay que mantener la inmunidad de arresto. Puede ocurrir —no es del caso en estos tiempos, felizmente, desde que se restableció la democracia en la Argentina, durante todos los gobiernos que se han venido sucediendo— que algún gobierno, en algún momento, cuando se está votando una ley trascendente, haciendo uso de

la fuerza pública, impida que un senador o un diputado, cuyo voto puede modificar el sentido de una ley, llegue al recinto y sea arrestado en el trayecto. Esto lo digo como hipótesis.

Es evidente que esa inmunidad hay que mantenerla porque, efectivamente, preserva no solamente los derechos del legislador sino el derecho a que funcione un cuerpo que representa al pueblo argentino o a las provincias. Pero es lo único que debemos mantener como "privilegio", entre comillas, además —por supuesto— del derecho a emitir opiniones sin ser sancionado por esas opiniones.

Entonces, lo que hace cuarenta años se está intentando transformar, que es esa inmunidad absurda que nos impedía ser llamados a un proceso, hoy se quiere presentar como la confirmación de un privilegio, porque estamos viviendo en el mundo del revés, porque mezclamos cualquier cosa y cualquier discusión y porque la metemos en la coyuntura.

Hay que decirle a la sociedad argentina que con este paso, tal vez provocado por esta situación, los legisladores después de la aprobación de la ley nos vamos a parecer muchísimo más a los ciudadanos del común que lo que nos parecíamos algunos minutos atrás, cuando todavía existía el régimen anterior.

3

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Maglietti. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero, pero el senador Maglietti solicita la palabra...

Sr. Molinari Romero. — No voy a conceder interrupciones.

Sr. Presidente (Genoud). — Es para una aclaración.

Sr. Maglietti. — De lo contrario, voy a solicitar una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Genoud). — No vale como amenaza. Si usted solicita una interrupción y el senador Molinari Romero se la concede, le dará la palabra.

Sr. Molinari Romero. — Está bien.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: yo respeto mucho al senador Moreau; es un destacado dirigente nuestro, pero hay una cuestión que no

voy a permitir. Obro de buena fe y expreso mis ideas con absoluta sinceridad. Tal vez mi pecado es ser demasiado sincero en este país de hipocresías, donde los argentinos nos golpeamos los corazones para luchar contra la corrupción y no hacemos absolutamente nada para que eso sea cierto y realidad.

¿Cómo que aquí no tiene nada que ver el juez que interviene en la causa? Si ese señor juez...

Sr. Presidente (Genoud). — Me permite, senador...

Sr. Maglietti. — ¡Voy a pedir una cuestión de privilegio si no me deja hablar!

Sr. Presidente (Genoud). — Senador Maglietti: lo que pasa es que usted pidió la palabra para una aclaración...

Sr. Maglietti. — Entonces, planteo la cuestión de privilegio porque me siento agraviado por el señor senador Moreau. Si me permite, tengo diez minutos.

Sr. Presidente (Genoud). — Yo le voy a conceder la cuestión de privilegio porque está en el Reglamento, pero también le digo que es función del presidente armonizar y coordinar las sesiones. Usted ya planteó una cuestión de privilegio sobre el mismo tema y el país entero conoce su posición.

Le concedo el uso de la palabra sabiendo que con su ponderación de juicio va a saber comprender lo que le he querido señalar.

Sr. Maglietti. — Voy a aclarar que respeto al señor senador Moreau, respeto su capacidad, pero lo que no puedo admitir fueron sus manifestaciones tratando de dejarme descolocado en este recinto. Eso no se lo voy a permitir a nadie, absolutamente a nadie. Y si es un compañero de bancada, tampoco se lo voy a permitir, pese a que no por eso lo voy a dejar de perdonar, porque hay que perdonar cuando uno se siente agraviado. Y yo, desde ya, lo perdono. Pues a pesar de sentirme agraviado, lo perdono. Porque si no lo hiciera, quien sufriría las consecuencias sería yo...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Genoud). — Por favor, guarden silencio, señores senadores...

Sr. Maglietti. — Quiero agregar, señor presidente...

Sr. Presidente (Genoud). – Senador: nosotros le queremos dar una buena noticia al país. Y los diarios, en este momento, están cerrando sus ediciones. No van a poder informar cómo salió la votación de este proyecto de ley si usted...

Sr. Maglietti. – Termino con lo siguiente, señor presidente.

Yo he sido sincero y estoy luchando sinceramente para que este país se encarrile definitivamente por la senda de la lucha contra la corrupción. Y eso lo vamos a lograr con jueces honestos. Si no buscamos los procedimientos para tenerlos, nunca en este país vamos a poder luchar contra la corrupción, porque ésta va a ser protegida por aquellos jueces que hoy están cuestionados y tienen pedidos de juicios políticos.

Sr. Presidente (Genoud). – La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

4

REGIMEN DE INMUNIDADES PARLAMENTARIAS

(Continuación)

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador por Córdoba Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. – Señor presidente: en realidad, creo que como usted señalaba recién, tendríamos que tomar debida conciencia de que este debate está siendo seguido –como durante todo el día lo fue el debate en la Cámara de Diputados– por muchas más personas que las que estamos ahora en este recinto. Y creo que, sobre la base de eso, lo mínimo que deberíamos tener es una actitud de respeto para con muchísimos miles de argentinos que están viendo cuál es la respuesta que las instituciones del país le dan, en primer lugar –como señaló Leopoldo Moreau antes–, a un tema que ha venido siendo debatido durante años en la República Argentina.

Siempre se nos dijo que no era la oportunidad justa o correcta; siempre se postergó para el día después el tratamiento de este tema, a pesar de que afectaba no solamente la condición de los parlamentarios sino también el concepto de igualdad ante la ley.

Por eso quiero decir, señor presidente y señores senadores, que vengo a este debate sin

ningún tipo de complejo, que me siento en esta banca para aprobar este proyecto sin ningún tipo de disminución, que no me siento parte de ningún pacto –y lo digo habiendo escuchado en la Cámara de Diputados y en ésta expresiones que me agravian– ni explícito ni implícito tendiente a sancionar hoy este proyecto de ley.

Sí me siento parte de una generación que tal vez afronte lo que otras generaciones de políticos no afrontaron en su debido momento. Pero también sé que, con el paso que vamos a dar hoy, nos sometemos no solamente al juicio de la sociedad sino también al de la Historia. Debe quedar claro que lo que hacemos hoy no es para arreglar un problema que tiene el Senado de la Nación en la actualidad ni para dirimir una competencia o un conflicto con un juez de la República, sino para poner las cosas blanco sobre negro con respecto a lo que es la interpretación de nuestra Constitución.

Por ello, señor presidente, pido por favor que en este caso, más allá de la conmoción que sufre el cuerpo, dejemos de lado toda consideración sobre lo que significa la actuación del Poder Judicial. Porque, en todo caso, lo que habría que decir es que el magistrado que está actuando tiene delante de sí el más grande desafío público que haya asumido en su vida. Acusado, sometido a acusación ante el Consejo de la Magistratura, sin embargo tiene frente a sí a otro poder.

Espero de ese juez la suficiente responsabilidad institucional para honrar a la República y que este mensaje que hoy, desde acá, en forma personal manifiesto, sea receptado por el juez porque también él tiene frente a sí el juicio de la Historia, no el juicio de los hombres que hoy compartimos un tiempo histórico.

Es cierto, como dijo recién el señor senador Leopoldo Moreau, que cada uno de nosotros puede opinar que este proyecto es mejor o peor. Y valoro el esfuerzo del senador Rodríguez Saá por tratar de acercar su posición o su proyecto a este debate. Pero también es cierto que hoy, además de una respuesta jurídica, nosotros estamos dando una respuesta política y estamos teniendo una actitud política como cuerpo político que somos de la República, sin escondernos. Y me alegro de que haya muchas cámaras de televisión esta noche siguiendo este debate porque lo hacen transparente frente al país.

Señor presidente: me siento absolutamente tranquilo al votar este proyecto. Además, como

hombre de la Alianza, siento que estoy cumpliendo con uno de los mandatos que nosotros prometimos al pueblo en la última campaña electoral, que era el de asegurar la transparencia en todas las acciones de los poderes públicos.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador García Arecha.

Sr. García Arecha. – Señor presidente: seré muy breve, pues van muchas horas de debate.

Pero para que no haya ninguna confusión quiero decir, como senador de la Unión Cívica Radical, que la expresión del radicalismo sobre este tema está dada por las palabras de los senadores Moreau y Molinari Romero, a través de reuniones que hemos tenido no sólo entre los integrantes del bloque sino con las autoridades partidarias.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Sapag.

Sr. Sapag. – Señor presidente: no voy a hablar de los agravios ni de los agraviados ni de los agraviantes.

Me voy a referir a las palabras que expresó el senador Rodríguez Saá que, como siempre, dio en la tecla e hizo una demostración más de su capacidad y de su lógica.

Pero como bien dijo el senador que habló anteriormente, éstos son momentos políticos y no legislativos. Creo que la situación que vive el Senado está pidiendo que se resuelva en este momento con el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, el cual voy a apoyar.

Sr. Presidente (Genoud). – Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. – Señor presidente: no hubiera intervenido si no se hubieran escuchado en este recinto expresiones agraviantes, insolentes diría yo, de parte de quienes no saben que hay que respetar las opiniones de todos.

Como parlamentarios deben saber que no se pueden atribuir a los legisladores segundas intenciones, que no pueden dirigirse en forma irrespetuosa porque revelan una bajeza que no es admisible en estos ámbitos parlamentarios ni en ningún ámbito en el que actúen hombres de bien.

Es muy fácil insultar, agraviar y traer mandatos para agraviar. Pero eso me lleva, señor presidente, a decir que voto esta ley totalmente convencido de su procedencia, de su necesidad, de su juridicidad.

Por supuesto que podrán haber soluciones mejores. Dicen que lo mejor es enemigo de lo

bueno. Pero lo cierto es que hoy tenemos este proyecto que ya viene con sanción de la Cámara de Diputados. Yo no dudo de que, quizá, puedan haber muchas otras soluciones, pero de lo que también estoy seguro, señor presidente, es de que este proyecto sigue la jurisprudencia antigua, pacífica y prácticamente indiscutida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el siglo pasado.

Aquí se han mencionado distintos casos como el de Nicasio Oroño en 1873; el de Colono en 1946 y el de Cuervo en 1986, así como otros en los que se ha sostenido jurisprudencialmente que ésta es la buena doctrina.

Este proyecto de ley lo único que ha hecho es recoger la doctrina del más alto tribunal de nuestro país en lo que hace a la interpretación de las cláusulas constitucionales que hablan de la inmunidad de arresto, no de la inmunidad de proceso. Entonces, atribuir segundas intenciones es realmente una bajeza porque no se trata de algo nuevo.

Además, desde un punto de vista práctico y no sólo jurídico, ¿qué pasaría si uno de los legisladores cuyo desafuero solicitó el juez planteara su exigencia de que le reciban declaración indagatoria? Si el juez no se la concede, ¿qué haría? ¿Un recurso en segunda instancia, un recurso ante la Corte? ¿Cuánto tiempo demoraría eso?

Señor presidente: ¿qué quiere hoy la opinión pública? Quiere que esta situación se esclarezca rápido. Quiere la verdad, cualquiera que ella sea; y a la verdad se llega más rápido por esta norma, no por un recurso judicial ante la Corte.

Parece que algunos no han entendido que por la otra vía esta situación insumirá muchos meses o, quizá, hasta años. Esta ley va a evitar que el juez tenga dudas en la interpretación, como ha ocurrido con otros magistrados, porque aquí ya no se trata de la doctrina de la Corte sino de una ley, de una norma positiva.

Entonces, lejos de contribuir a amparar ningún tipo de impunidad, con esta sanción de hoy vamos a hablar de la voluntad clara, firme y precisa de este Senado de la Nación en el sentido de que se quiere llegar hasta las últimas consecuencias; de que ningún legislador se va a amparar en sus fueros porque mañana mismo el juez nos puede llamar a prestar declaración indagatoria, lo que además constituye un derecho a la defensa que tienen aquellos a quienes se les imputa la comisión de un delito.

Por eso, señor presidente, es indignante que algunos atribuyan segundas intenciones cuando lo que estamos haciendo es dar un instrumento jurídico que posibilite el descubrimiento de la verdad rápidamente para que, si hay culpables, lo paguen, y si hay inocentes, dejen de seguir cargando con esta cruz que desde hace tiempo estamos llevando los senadores como consecuencia de todo este proceso que nos agravia, que realmente nos mortifica y nos humilla.

Entonces, hoy estamos dando una prueba, no sólo al aprobar un instrumento jurídico, para que se descubra la verdad sino que también estamos planteando una solución práctica, señor presidente.

Por lo expuesto, no tengo ninguna duda de que voy a votar a favor de una noma que va a ser digna del estado de derecho que estamos viviendo.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador Villarroel.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: como represento a un bloque que desgraciadamente es unipersonal, pese a mi voluntad en contrario, no puedo soslayar alguna palabra que, en este caso, me parece necesaria.

Dije al principio, cuando adelanté mi voto afirmativo, que me remitía a los fundamentos expresados en su oportunidad y que obran en el Diario de Sesiones correspondiente a la sesión del 5 de junio de 1996. En ellos, el senador Genoud, que preside este cuerpo, y varios otros señores senadores expusimos largamente respecto de la doctrina constitucional, que está en los fundamentos de este proyecto: no es otra que el hecho de que el actual artículo 70 de la Constitución Nacional no estatuye ningún fuero —lo de fuero es una terminología equívoca—; lo único que estatuye es la inmunidad de arresto. Incluso, se trata de una inmunidad de arresto que no es absoluta, porque tiene excepción en el caso de flagrancia en la comisión de un delito.

No voy a incurrir en exposiciones jurídicas. Se han hecho algunas y ya son bastantes. Lo único que voy a aclarar es un par de cosas.

En primer lugar, digo que uno comprende los estados de ánimo de quienes se ven puestos en la picota pública. Pero también debe hacerse la composición de lugar correlativa de que una de las exigencias que debemos afrontar y cumplir los hombres que estamos en la vida pública —con mayor o menor vocación, eso no importa—

es que debemos obrar con templanza. La templanza es una suerte de virtud; no es fácil, pero es decisiva para que quienes nos ven nos crean.

El descrédito de la clase política en gran medida viene no tanto por las conductas sino por la faz histriónica que presentan algunas representaciones que se hacen. A veces, el exceso en la palabra, el exceso en el gesto produce desconfianza. Uno tiene la obligación de tragarse sentimientos, porque es un deber que tenemos ante nuestro prójimo y particularmente ante nuestros representados: nuestra obligación es tratar de representarlos, es tratar de comprender sus estados de ánimo, pero no contagiarnos nosotros de los fervores, por mucho que nos duelan algunas cosas específicas.

La solución que propone la ley es la de la Constitución y la han sostenido juristas tan ilustres como Rafael Bielsa, el abuelo del actual funcionario; Linares Quintana; González Calderón; el doctor Carlos Colautti, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires; el doctor Quiroga Lavié; el propio jurista Reynaldo Vanossi, que fue el autor de ese dictamen de comisión que se recordó aquí en el caso Reynaldo, en la Cámara de Diputados, y el doctor Bidart Campos, que incluso separa este tema de la cuestión de la suspensión y dice que puede haber un desafuero sin suspensión del legislador, según lo ha sostenido en artículos periodísticos.

Respecto de esto último no hay duda, si la complicación no ha sido producto de alguna desafortunada expresión de nuestros Constituyentes del '53, que fueron muy sabios. Tampoco es el resultado de la confusión de algún doctrinario. Simplemente, es el resultado de códigos procesales que han metido a las Legislaturas en algunos breves, generalmente imposibles de desenredar.

¿Qué ocurre? Como esos códigos procesales impusieron la necesidad del desafuero, vale decir de la suspensión previa para que sea indagado un legislador, y como la Constitución exige dos tercios, casi nunca se conseguían los dos tercios en ninguna Legislatura provincial, y mucho menos nacional, para que el legislador pudiera comparecer como cualquier hijo de vecino —que es lo que corresponde— ante el juez, para responder a su requisitoria. Esa es la situación, dicha en términos llanos y sin tecnicismo jurídico. Por eso es que se generalizó la

sensación de impunidad que estaba algo así como consagrada a favor de los legisladores. Porque claro, es difícil conseguir los dos tercios.

Entonces, ¿qué hacemos con esto? Volvemos al derecho; volvemos a lo que dice la Constitución sabia del 53. Simplemente dice que solamente para privar de su libertad al legislador es necesario el previo juicio público de la Cámara respectiva que haga mérito del sumario, etcétera, etcétera.

Aquí no estamos ni siquiera haciendo mérito de ningún sumario. No cabe que hagamos distinciones. Casi es ofensivo que digamos que hay algo de este legislador o de este otro. No; acá lo que estamos diciendo con esta ley es que el legislador que aparece imputado tiene el deber, y también el derecho, de comparecer cuando el juez lo llama. Y aun tiene el derecho, sin que lo llame el juez, de ir y exigirle, con normas jurídicas sustentadoras, que le reciba indagatoria y la prueba que quiera ofrecer en descargo suyo.

De manera que me parece que no hace falta decir más cosas. Si hay alguno que quiera sospechar, bueno, mala suerte para él. Yo creo que uno de los factores principales del descrédito de la clase política, que es un hecho cierto, es precisamente que los actores de la clase política olvidan demasiada veces que el insulto, el mal pensamiento, la diatriba contra el adversario tarde o temprano termina por volverse contra el propio emisor de la diatriba. Sigue siendo verdad que el insulto, el agravio dice mucho más respecto de quien lo emite que respecto al destinatario del agravio. Y el habernos olvidado muchas veces —me incluyo— de esta regla sencilla, es quizás uno de los principales factores para que la gente nos haya dejado de creer. (*Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el senador Ulloa.

Sr. Ulloa. — Señor presidente: siendo este tema no sólo jurídico sino político, mi partido institucionalmente resolvió que los legisladores nacionales apoyáramos plenamente la acción de la justicia. Con la aprobación de este proyecto de ley estoy convencido de que cumplo ese mandato.

Sr. Presidente (Genoud). — Tiene la palabra el senador Gioja, último orador antes de la votación.

Sr. Gioja. — Señor presidente: creo que se ha dicho todo lo que tenía que decirse. Solamente quiero expresar el orgullo que sentimos cuando dijimos que aquí había dos caminos muy marcados para que este Senado funcionara. Uno tenía que ver con el funcionamiento en sí del cuerpo, sancionando leyes, trayendo ministros, trabajando como tenemos que hacerlo todos los días. El segundo, era lo que teníamos que hacer para resolver el tema que nos apesadumbra, que está en la opinión pública, el que lamentablemente hace que en este Senado haya un cono de sospecha. Creo que con lo de hoy empezamos a transitar ese camino que tiene que llevarnos a que con nuestro trabajo la gente vuelva a creer o, por lo menos, a empezar a recuperar esa credibilidad perdida.

Pido que se pase a votar el proyecto para que podamos sancionarlo esta misma noche.

Además, solicito que al finalizar el tratamiento de este proyecto en particular pasemos a cuarto intermedio por diez minutos para hacer una reunión de presidentes de bloque en el salón contiguo, y luego seguir la sesión.

Sr. Presidente (Genoud). — Se va a votar en general el proyecto de ley.

—La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. (*Aplausos.*)

5

CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente (Genoud). — Se va a votar la moción de cuarto intermedio formulada por el senador Gioja.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). — Pasamos a cuarto intermedio por diez minutos.

—Es la hora 0 y 33 del viernes 8 de septiembre de 2000.

—A la 1 y 43:

Sr. Presidente (Genoud). — Pido a los señores senadores que ocupen sus bancas para que podamos formar quórum.

Continúa la sesión.

INSERCIONES

1

Solicitada por el señor senador Tell**PROYECTO DE LEY C.D.-12/2000- s/
EMERGENCIA ECONOMICA.
FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA****Señor presidente**

1. Permítame, primeramente, poner de resalto la alta intensidad de disidencias que ha concitado, en-

ne los miembros de este cuerpo, el dictamen formulado a propósito del proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados conocido con la denominación de declaración de emergencia económica.

Y al propio tiempo permítame, señor presidente, adelantar mi disenso con el mismo —ya consignado expresamente con mi firma que sigue al citado dictamen— y los motivos de tal disidencia.

En este último sentido, y a fin de no sobreabundar las expresiones igualmente disidentes de mis

colegas cuyos reproches al proyecto van dirigidos (como el señor presidente habrá advertido de las anteriores intervenciones) a planos diferentes del asunto, habré de circunscribirme a los temas que son propios de la Comisión de Trabajo y Previsión Social a la que pertenezco y me honro en presidir.

Dicho concretamente, a los aspectos laborales (los que el dictamen dedica el capítulo III —sin olvidar sus conexiones con el artículo 39 y la genérica problemática de su artículo 1º) y previsionales (en este caso particularmente concentrados en los artículos 1 y 14 sobre consolidación y atención del pago de obligaciones previsionales a favor del sector pasivo).

II. Con relación a lo primero, señor presidente, en referencia a los aspectos laborales— cabe señalar:

—La absoluta innecesariedad de un acto legislativo como el propuesto para regular situaciones que el propio proyecto afirma deben ser practicadas de conformidad con las normas comunes que actualmente rigen las relaciones de empleo público, sean éstas las de la ley 25.164 o las del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector público aprobado mediante el decreto 66/99. Dicho de otro modo, si existen ya normas precisas para gobernar estos aspectos, mal puede necesitarse otra bajo la capa de la “emergencia” para hacer lo propio, salvo que de entre sus pliegues se oculten otras intenciones que no sean el sano ejercicio de las facultades de administración de sus propios recursos humanos por parte del Poder Ejecutivo. Y lo propio puede decirse respecto de la delegación de facultades prevista a favor de los otros dos poderes del Estado.

—En efecto, tanto la reubicación de agentes contemplada en el art. 4 del dictamen como la posibilidad de “democión” prevista en el art. 5 del mismo instrumento relativa a los funcionarios que ocupan el primer rango inferior a “subsecretario o equivalente” (repito, señor presidente, las fórmulas del dictamen) cuentan ya con cobertura suficiente en las normas preexistentes. Y son legítimas las sospechas que despierta el texto del dictamen sobre su posible futuro uso disfuncional: es cierto que el instrumento acota temporalmente a partir del 11 de mayo del pasado año las designaciones afectables con la democión frente a la cruda sanción de Diputados que amén de ampliar la operatividad de la posible democión a los 3 primeros niveles de la grilla administrativa tampoco puso hito retroactivo sobre la fecha de designación de los altos niveles afectables; pero no es menos cierto que cuando se afectan a estos altos niveles se los empuja en la práctica a su exodo de la administración del Estado, lo sea en el sector centralizado o descentralizado. E, insisto, lo propio podría decirse con relación a los otros dos poderes del Estado conforme la facultad que provee el art. 39 del dictamen;

—En otras palabras: no ignora este Senado la distinción académica entre estabilidad funcional y estabilidad en el empleo, distinción que, sin duda,

puede resultar operable en situaciones comunes. Pero tampoco desconoce que el mecanismo propuesto por el dictamen habrá de tornarse inexorablemente en un instrumento de fomento de la inestabilidad de los altos cargos del Estado. Precisamente, en aquellos donde resulta común su sumisión a procedimientos rigurosos de selección a través de jurados imparciales, y donde el claro objetivo de las normas que orientan estos procedimientos es alcanzar el mayor grado de excelencia y eficacia en la designación de los cuadros de mayor nivel al servicio de la administración, el Congreso o la judicatura. Sintéticamente, el voceado resguardo de la estabilidad con que se viste la redacción del artículo 51 viene a convertirse aquí en lesión evidente de la directiva constitucional sobre estabilidad del empleado público exaltada en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna.

III. A su vez, y con relación ahora a los aspectos previsionales, corresponde adelante mi censura al exagerado plazo de 10 años que el artículo 14 del dictamen reconoce para el pago de las acreencias del sector pasivo. Va de suyo que un período de semejante extensión prácticamente veda el acceso real al cobro de sus créditos a la mayoría de este sector. Parece innecesario remarcar la crueldad intrínseca de esta decisión: lisa y llanamente ignora el significado de diez años en la vida de un jubilado o pensionado, o del beneficiario de un retiro por invalidez.

Y más innecesario todavía resulta subrayar que una propuesta de este tipo constituye una clara lesión al derecho de propiedad cuyo linaje constitucional parece ocioso recordar a este Honorable Senado. Máxime cuando, como en este caso, se ataca la escasa propiedad de los más desmunidos y débiles, pues tal es el perfil mayoritario del sector pasivo.

IV. Finalmente, me parece, señor presidente, evidentemente falsa la caracterización “social-laboral” de la emergencia abordada por este dictamen, contrariando, incluso, su limitación al espacio económico-financiero donde sólo resulta imaginable y aplicable. Más aún, me parece, señor presidente, que tal calificación “sociolaboral” sólo sirve para abrir la puerta a probables iniciativas que sólo busquen la desmejora del mundo del trabajo y la agudización de las actuales carencias sociales.

Propongo, en orden a lo antes expuesto:

— Se elimine la expresión “sociolaboral” en el artículo 1º, y

— Se supriman el capítulo III, “De la relación de empleo público”, y el artículo 391, todos del dictamen en debate, y

— Se eliminen también todas las referencias a la temática previsional existentes en el capítulo V del dictamen, a cuyo fin, y a todo evento, me permito, señor presidente, proponer la reformulación de los

respectivos textos de los artículos 13 a 17 conforme lo detallo a continuación, a la par que la supresión del artículo 18:

Artículo 13: Consolídanse en el Estado nacional, con los alcances y en la forma dispuesta por la ley 23.982 las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1º de enero de 2.000 o que resuelvan en el pago de sumas de dinero y que se correspondan con cualquiera de los casos de deuda consolidada previstos en el artículo 1º y se trate de obligaciones de los entes incluidos en el artículo 2º, ambos de la ley 23.982. La fecha de consolidación será el 31 de diciembre de 1999.

Se excluyen expresamente de esta consolidación, las obligaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las del Instituto Nacional de Reaseguro Sociedad del Estado (en liquidación); y las obligaciones previsionales.

Se extiende a la presente ley el carácter de orden público en los términos y con los alcances previstos en el artículo 16 de la ley 23.982.

La deuda que se consolide según lo previsto en la presente, quedará incluida dentro de los conceptos incorporados en el inciso 1) del artículo 2º de la ley 25.152.

Quedan excluidas de la presente ley las deudas consolidadas por la ley 23.982 que aún no hubieran recibido los bonos de consolidación ordenados en dicha ley. Dichas deudas al término de su proceso administrativo o judicial serán pagadas con los bonos establecidos en la ley 23.982.

Artículo 14: Los pedidos de informes o requerimientos judiciales respecto al plazo en que se cumplirá cualquier obligación alcanzada por la consolidación dispuesta en la presente ley serán respondidos por el Poder Ejecutivo o cualquier ente deudor de obligaciones alcanzadas por la consolidación indicando que tales obligaciones quedarán sujetas a los recursos que anualmente contenga la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional, para hacer frente al pasivo consolidado al 31 de diciembre de 1999, en plazo máximo de dieciséis (16) años para las obligaciones generales.

Artículo 15: Alternativamente a la forma de pago prevista, los acreedores podrán optar por suscribir a la par por el importe total o parcial de su crédito, en moneda nacional o en dólares estadounidenses, bonos de consolidación en las condiciones que determine la reglamentación.

Artículo 16: El Poder Ejecutivo dispondrá la emisión de bonos de consolidación –cuarta serie– hasta la suma necesaria para afrontar las solicitudes de suscripción que reciba para cancelar las obligaciones consolidadas por esta ley.

Artículo 17: Los suscriptores originales de los bonos de consolidación –cuarta serie– podrán cancelar a la par deudas vencidas al 1º de enero de 2.000 comprendidas y en las condiciones previstas, para

cada uno de los bonos en los artículos 13, 14 y 15 de la ley 23.982.

Artículo 18: Suprimido (según lo propuse antes).

Con tales disidencias y fundamentos, queda mi voto así formulado, señor presidente.

2

Solicitada por el señor senador Baum

Señor presidente: comienzo mi intervención leyendo lo siguiente:

“Artículo 1º. – Declárase en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económico-financiera de la administración pública nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras oficiales,...”.

Esto que acabo de leer no es una nueva redacción de la ley que estamos tratando. Muy por el contrario, es el artículo 1º de la ley 23.696 de reforma del Estado, que atento a la situación que el país estaba viviendo en aquel entonces, establecía una emergencia que permitió comenzar una reforma del Estado que provocaría importantes transformaciones.

Uno de los cambios que se preveía, y que luego se concretó, era la privatización de aquellas empresas que venían siendo prestados por organismos públicos en forma directa.

Muchos de nuestros comprovincianos fueron dolorosamente partícipes de los procesos de privatización que se encuadraron dentro de lo que se llamó “reforma del Estado” y que si bien permitió superar la coyuntura y solucionar algunos problemas que se arrastraban desde varias décadas atrás, dejaron graves secuelas en el campo social.

Si realizamos un análisis proyectando las condiciones creadas a partir de esta transformación, no cabe duda que la situación general de la Argentina podrá ser buena a futuro y permitirá abrigar esperanzas ciertas para nuestros descendientes, siempre y cuando tengamos la valentía de efectuar las correcciones que la realidad nos indica. Asimismo, también debemos tener muy en cuenta a aquellos que hoy, como consecuencia directa de las privatizaciones –o de las equivocaciones cometidas– atraviesan una situación sumamente difícil.

Los artículos 21 al 40 de esa ley establecían los mecanismos para que los empleados de una empresa u organismo a privatizarse participaran de su capital accionario mediante lo que se denominó el Programa de Propiedad Participada.

¿Qué fue el Programa de propiedad Participada? Se trataba de un porcentaje –minoritario– de las ac-

ciones de las empresas privatizadas que se transferían a los trabajadores, de modo tal que pasaban a ser propietarios de una porción determinada de la empresa y de las ganancias que produzcan.

Esto no era gratuito ni automático. El trabajador debía adherirse y el porcentaje de acciones que le correspondía (para ello se tenía en cuenta la antigüedad; categoría, grupo familiar del trabajador, etcétera) se iba pagando con los dividendos que le correspondían por las ganancias que reportaba la empresa.

Este Programa fue una novedad jurídica en nuestro país y los antecedentes que existían en el mundo no eran tantos y en general se daban cuando empresas estaban al borde de la quiebra, siendo sus principales acreedores los trabajadores, a quienes se les abonaba con parte de la empresa. Algunos ejemplos notables: AVIS y Polaroid.

El Programa se concretó en muchos casos; pero interpretaciones muy parciales excluyeron a muchos ex trabajadores de esas empresas de la posibilidad de participar del mismo, de influir —aunque fuera indirectamente— en el manejo de la empresa y de percibir los montos correspondientes a la venta de la parte que les pertenecía. El ejemplo más típico de esto es lo acontecido en YPF, donde se tomó el plus existente al monto de la efectiva entrega a los compradores privados como los únicos que participaron y no a todos los empleados que formaban parte de YPF S.A.

Tal vez en un primer momento muchos de estos humildes trabajadores no advirtieron la injusticia que estaban sufriendo, fundamentalmente por la preocupación que les causaba superar la difícil situación laboral y económica que la mayoría vivía. Sin embargo, cuando se alertó de esta situación, comenzaron a presentarse las demandas judiciales correspondientes.

Quienes han reclamado judicialmente por sus derechos, han obtenido sentencias favorables tanto en primera como en segunda instancia. Actualmente, la Corte Suprema entiende en las apelaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo nacional. Pero si se confirmasen los fallos existentes, nos encontraríamos con que una nueva emergencia les vuelve a impedir gozar de sus derechos.

Se estaría aplicando dos veces el mismo principio de excepcionalidad para privar a estos compatriotas de la posibilidad de contar con los recursos económicos que les pertenecen. Resulta obvio e innecesario destacar los principios constitucionales que se están desconociendo si no se excluyen estos casos de esta nueva emergencia.

En muchas de nuestras provincias hemos sufrido, y seguimos sufriendo, las consecuencias del desempleo provocado por la reestructuración efectuado. Vecinos nuestros abatidos por la fuerza de las circunstancias; jóvenes hijos desesperanzados y una frustración angustiante y demolidora son realidades cotidianas con la que muchos de nosotros

convivimos por esta causa. La posibilidad de cobrar algún monto como producto de lo que el país ganó con la venta del capital accionario de la empresa sembró, momentáneamente, una pequeña esperanza.

Sin embargo el tiempo ha pasado, los fallos se han sucedido; pero la realidad de desconocimiento de este derecho por parte del Estado nacional sigue vigente. Durante la última campaña electoral se hicieron muchas promesas. A pesar de ello, lo concreto es que se sucedieron las apelaciones, dejando a miles de compatriotas sumidos en la más denigrante de las pobreza y de las desilusiones.

Creo que todavía queda margen para solucionar, parcialmente, esta situación. Es por ello que tenemos la obligación de llamar la atención sobre este problema y no aprobar medidas que dificulten aún más la resolución de este problema. Asimismo, debemos requerir de las autoridades pertinentes un cambio en su actitud que les permita enfrentar, con decisión, la solución de esta afligente realidad.

No se está proponiendo crear un privilegio u otorgar una prebenda a favor de estos trabajadores —aunque bien podría pedirse un poco de solidaridad por los beneficios que se obtuvieron a partir de las empresas que ellos ayudaron a formar— sino cumplir fielmente con las condiciones establecidas en el momento de realizarse la reforma del estado y con los derechos y garantías que determina nuestra Constitución.

Estas acciones que se le adeudan a ex trabajadores de YPF y de otras empresas privatizadas se tienen que pagar ahora; ahora y en efectivo para lo cual tendrán que salir los recursos del presupuesto nacional.

Por las razones antes expuestas, es que propongo la siguiente modificación al proyecto que estamos tratando que quedaría redactado de la siguiente forma:

“Artículo 13: Consolídase en el Estado nacional, con los alcances y en la forma dispuesta por la ley 23.982 las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 10 de enero de 2000, y las obligaciones previsionales originadas en el régimen general vencidas o de causa o título posterior al 31 de agosto de 1992 y anterior al 10 de enero de 2000 que consistan en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, y que se correspondan con cualquiera de los casos de deuda consolidada previstos en el artículo 10 y se trate de obligaciones de los entes incluidos en el artículo 20 ambos de la ley 23.982. En el caso de obligaciones previsionales originadas en el régimen general sólo serán objeto de consolidación los casos en los cuales el beneficio previsional hubiera sido otorgado antes de la fecha de entrada en vigencia del sistema previsional establecido por la ley 24.241. La fecha de consolidación para ambos tipos de obligaciones será el 31 de diciembre de 1999.

"Se excluyen expresamente de esta consolidación, las obligaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado (en liquidación); y las obligaciones previsionales originadas en el régimen general cuya cancelación se hubiera previsto realizar en efectivo en la ley 25.237, hasta el importe autorizado por la misma ley.

"Además quedan excluidos de esta consolidación y de los alcances dispuestos por el artículo 60 de la presente, las deudas y los juicios que hayan iniciado ex trabajadores de empresas privatizadas por el Estado por el cobro de las acciones que se les adeudan por el régimen del Programa de Propiedad Participada (ley 23.696, art. 210).

"Se extiende a la presente ley el carácter de orden público en los términos y con los alcances previstos en el artículo 16 de la ley 23.982.

"La deuda que se consolide según lo previsto en la presente quedará incluida dentro de los conceptos incorporados en el inciso f) del artículo 20 de la ley 25.152.

"Quedan excluidas de la presente ley las deudas consolidadas por la ley 23.582 que aún no hubieran recibido los bonos de consolidación ordenados en dicha ley. Dichas deudas al término de su proceso administrativo o judicial, serán pagadas con los bonos establecidos en la ley 23.982."

Con estas razones dejo fundada mi disidencia parcial al dictamen de la Ley mal denominada de Emergencia Económica, adelantando que en el tratamiento en particular efectuaré las modificaciones señaladas al artículo 130, que entiendo son justas y necesarias.

Muchas gracias.

3

Solicitada por el señor senador Costanzo

Señor presidente:

Proyecto en tratamiento, implica una oportunidad para aclarar dudas, y despejar equívocos en la remanida cuestión de los fueros y las inmunidades.

Ambas Cámaras del Congreso, reiteradamente han sostenido que los fueros no obstaculizan la sustanciación de las causas judiciales, en tanto no se requiera la privación de libertad del legislador, ya que consagran la inmunidad de arresto, no de proceso, lo que implica que cualquier miembro del Congreso, puede ser investigado y someterse a la requisitoria judicial, pudiendo los magistrados tomar indagatorias e incluso procesar a un parlamentario. Este criterio, por otra parte, consagrado como doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos.

Sin perjuicio de estos claros antecedentes, cierto es también, que no había unanimidad de criterio en

torno al caso, y muchos jueces, para investigar a un parlamentario, requerían su desafuero. Es evidente que la ley en tratamiento cierra cualquier posibilidad de interpretación divergente, y otorga a los magistrados un criterio unívoco para enfrentar estas cuestiones, consagrando con fuerza la posibilidad de investigar e indagar a los parlamentarios.

Las extraordinarias circunstancias que está viviendo este Senado, no pueden menos que otorgar un especial sentido a la aprobación de la ley en tratamiento, ya que permitirá a muchos de los que estamos rozados por el escándalo que sacude a las instituciones, acudir sin cortapisas a la justicia, para aclarar cualquier duda, y brindar nuestro aporte al esclarecimiento de estos supuestos hechos.

Esta Cámara ha recibido hace pocas horas un pedido de desafuero colectivo de 11 miembros, en un hecho sin precedentes en la historia institucional de la Argentina. El trámite público del debate sobre el pedido de desafuero, ha permitido a los miembros de esta Cámara, tener acceso al expediente judicial, y hemos observado abortos, la absoluta, manifiesta y total carencia de elementos que justifiquen, en la gran mayoría de los casos, el desafuero solicitado.

Todos somos testigos, de la presión de la opinión pública, del grado de descrédito, sospecha y aun de condena pública que hoy pesa sobre este cuerpo. Pero el selectivo, y a mi juicio arbitrario, pedido de desafuero para 11 senadores, ha puesto a estos parlamentarios en el centro de las miradas acusadoras, e injustificadamente, ha focalizado en estos 11 senadores, el mayor grado de sanción y descrédito social.

La aprobación de la ley en tratamiento, como anticipé, sin discusión alguna, nos permitirá someternos a todas las instancias judiciales, incluso la indagatoria. Siempre se ha sostenido, que la declaración indagatoria, constituye un elemental y primario acto de defensa de quien está imputado en la comisión de un delito, y con mucha más razón, este senador está deseoso de poder ejercer este derecho, ante la afrenta que implica el estar incluido entre los senadores cuyo desafuero se solicita, sin que haya elemento alguno en lo que hace a mi persona, que pueda justificar este pedido. A no ser que se siga otorgando entidad acusadora al infame y mentiroso libelo anónimo.

Por todo ello, Señor Presidente, apoyo la sanción de esta ley, que no sólo va a brindar una solución clara y unívoca, en el sentido de que los fueros consagran la inmunidad de arresto, pero no de proceso, sino porque frente a la situación de excepción que está viviendo este cuerpo, permitirá a los miembros de esta Cámara, una participación clara y un aporte real, al esclarecimiento del caso que está conmoviendo a las instituciones de la República, y que bajo ninguna circunstancia puede quedar irresuelto.